

BOLETÍN

**JUECES ADMINISTRATIVOS DE
NEIVA**

JURISPRUDENCIAL

EDICIÓN

001

ENERO – MARZO
2025



**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
DE NEIVA
2025**

República de Colombia
Juzgados Administrativos de Neiva

Lina Marcela Cleves Roa
Coordinadora Juzgados Administrativos

COMITÉ EDITORIAL

Jueces

Dra. Eylen Genith Salazar Cuellar	Juzgado Primero Administrativo
Dr. Eduardo García Lizcano	Juzgado Segundo Administrativo
Dra. Ibette Zuleima Suaza Mora	Juzgado Tercero Administrativo
Dra. Ana María Correa Ángel	Juzgado Cuarto Administrativo
Dra. Carmen Emilia Montiel Ortiz	Juzgado Quinto Administrativo
Dr. Miguel Augusto Medina Ramírez	Juzgado Sexto Administrativo
Dra. Lina Marcela Cleves Roa	Juzgado Séptimo Administrativo
Dra. María Consuelo Rojas Noguera	Juzgado Octavo Administrativo
Dr. Carlos Daniel Cuenca Valenzuela	Juzgado Noveno Administrativo
Dr. Álvaro Andrés Cabrera Álvarez	Juzgado Décimo Administrativo
Dr. Franklin Núñez Ramos	Juzgado 601 Administrativo

RELATORÍA

Guillermo Andrés Rojas Trujillo	Juzgado Séptimo Administrativo
---------------------------------	--------------------------------

PUBLICACIÓN

Carlos Andrés Tovar Cuellar	Ing. Sistemas Jurisdicción Administrativa
-----------------------------	---

* <https://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-de-neiva-florencia/324>
* <http://ramajudicialdelhuila.gov.co/newSite/administrativo/>
* <https://www.facebook.com/share/1BJa5ALj2U/?mibextid=wwXlfr>

EDITORIAL:

Como Jueza Coordinadora de los Juzgados Administrativos del Circuito de Neiva, me siento honrada de presentar el primer Boletín Jurisprudencial de los Juzgados Administrativos de Neiva.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal difundir las sentencias y autos más relevantes emitidos por nuestros diez (10) despachos judiciales permanentes, comprometidos con la transparencia, la publicidad, y el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia para todos los ciudadanos. Con este boletín, buscamos fortalecer la relación entre la justicia y la comunidad, promoviendo una cultura de respeto y comprensión de nuestras decisiones.

Este boletín está dedicado a todos los abogados, académicos y funcionarios públicos que buscan mantenerse actualizados sobre los últimos desarrollos en la jurisprudencia administrativa de nuestra región. Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad para todos ellos, y que contribuya a fortalecer la justicia y la seguridad jurídica en nuestra comunidad.

Queremos agradecer a todos los que participaron en esta iniciativa por su compromiso con la justicia y su dedicación a la excelencia en la administración de justicia. Su trabajo y esfuerzo han hecho posible esta publicación, y estamos seguros de que será una herramienta valiosa para todos los que buscan conocer y aplicar la ley de manera justa y equitativa.

Esperamos que este boletín sea el primero de muchos, y que continúe siendo una fuente de información y conocimiento para todos los que se interesan por la justicia administrativa en nuestra región.

Agradecemos su atención y esperamos sus comentarios y sugerencias para futuras ediciones.

LINA MARCELA CLEVES ROA
Jueza Coordinadora

TABLA DE CONTENIDO

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL

- Rad. **41001333300420220034500**
Enfoque diferencial con perspectiva de género para la sustitución pensional a favor de mujer separada legalmente. [pág. 4](#)
- Rad. **41001333300520220019300**
Posibilidad del docente de optar por la pensión que le resulte más favorable económicamente. [pág. 6](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – TRIBUTARIO

- Rad. **41001333300620240021500**
Derecho a la exención de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico. [pág. 8](#)
- Rad. **41001333300620230032900**
Información de terceros (exógena) en la liquidación oficial de revisión de renta e imposición de sanción por inexactitud. [pág. 10](#)

REPARACION DIRECTA

- Rad. **41001333300720200031100**
Responsabilidad del estado por pérdida de título valor en proceso ejecutivo. [pág. 12](#)
- Rad. **41001333300520220049600**
No aplica cláusula general de competencia, cuando la demandada sea una sociedad cuyos aportes estatales no superen el 50%. [pág. 14](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Juzgado:	Cuarto Administrativo de Neiva
Instancia:	Primera
Radicación:	41001333300420220034500
Demandante:	ADELA PÉREZ SALAZAR
Demandado:	CASUR
Fecha:	26 de enero de 2024

Enfoque diferencial con perspectiva de género para la sustitución pensional a favor de mujer separada legalmente

Problema Jurídico

¿Determinar si se debe declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 2564 del 28 de marzo del 2.022 y la Resolución 5138 del 31 de mayo del 2.022, que negaron a ADELA PEREZ SALAZAR el reconocimiento y pago la pensión de sobreviviente como cónyuge supérstite respecto de la asignación de retiro en el monto del 80% del agente retirado y fallecido Jorge Enrique Sanabria Moreno y se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios sobre los valores acumulados dejados de cancelar a partir del 21 de abril de 2020 (por solicitud de la apoderada de la parte demandada se aclaró la fecha del deceso del causante), fecha de la muerte del causante, ante el desconocimiento del derecho constitucional y vía de hecho como de los medios probatorios, lo que genera vulneración a las normas previstas en los Arts. 2,4, 5, 13, 29, 42 y 48 de la Constitución Nacional, Arts. 1, 3 de la Ley 54 de 1990, Arts. 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 (...)?

Extracto

“A merced con lo auscultado en el cardumen probatorio que reposa en el plenario, discurre el despacho que, Adela Pérez Salazar, tenía un vínculo matrimonial con el extinto Jorge Enrique, hasta la fecha de su defunción, lazo jurídico que solo hasta ese momento se disolvió por razones de la muerte, más no por la separación de hecho que existía entre los cónyuges, dado que esta situación no disuelve la sociedad conyugal, conforme lo anteriormente previsto, amén de que la sentencia que declaró la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico no estaba ejecutoriada para ese momento; hecho que le concede la titularidad del derecho.
(...)”

En este orden de comprensión, resulta necesario señalar que la violencia de género suscitada contra la aquí accionante por parte del causante durante el tiempo que convivieron como marido y mujer, la marginó del mercado laboral o de realizar cualquier tipo de actividad de la que pudiera derivar ingresos a fin de lograr su independencia económica; por el contrario, vivió en constante y permanente dependencia de su pareja bajo el poder económico que aquél ejercía sobre ella al demostrarse como su proveedor, quien además de controlar sus decisiones y proyecto de vida, dado que no le permitía laborar en su salón de belleza, la agredía físicamente cuando pretendía desarrollar esa actividad.

De ahí que, resulte desproporcional e inequitativo a la luz del ordenamiento jurídico convencional, constitucional y legal que ampara los derechos de las mujeres, que la señora Adela Pérez Salazar después de convivir por tantos años con el causante, sometida a violencia económica y física, ahora que está en una situación de indefensión en razón a su edad (72 años) y económica, pues no cuenta con una fuente de ingresos estable que le permita autosostenerse pues depende de la ayuda que le puedan proporcionar sus hijos, se le despoje de su derecho a percibir una cuota parte de la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite, cuando está debidamente demostrado que siempre dependió económicamente de su marido, no porque así lo haya decidido en un acto libre y voluntario, sino por la coacción que aquél siempre ejercía sobre ella.

(...)

A fin de resolver este punto de debate, es procedente acudir a la regla prevista en el inciso final del Parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, que dispone de la convivencia no simultánea durante los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante, con unión conyugal vigente pero con separación de hecho, asignándole una cuota parte a la compañera permanente en proporción al tiempo convivido con el de cujus siempre y cuando sea mayor a cinco años, asignándole la otra cuota parte a la cónyuge.

(...)

El anterior raciocinio conduce a esta instancia a destacar que, para encontrar la proporción pertinente al porcentaje a asignar de la sustitución de la asignación de retiro, se reconocerá un veinte por ciento (20%) de cuota parte por cada 10 años de convivencia, atendiendo la situación fáctica del caso y el enfoque diferencial aplicado en esta sentencia en favor de la demandante, sin que ello implique desconocimiento del derecho que le asiste a la señora Ayda García en calidad de compañera permanente”.

Ver providencia: [SENTENCIA](#) (Decisión sin firmeza, en razón a que actualmente se encuentra corriendo términos de ejecutoria)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Juzgado:	Quinto Administrativo de Neiva
Instancia:	Primera
Radicación:	41001333300520220019300
Demandante:	GILMA GUAYARA ROA
Demandado:	UGPP
Fecha:	26 de noviembre de 2024

POSIBILIDAD DEL DOCENTE DE OPTAR POR LA PENSIÓN QUE LE RESULTE MÁS FAVORABLE ECONÓMICAMENTE

Problema Jurídico

¿(...) determinar, bajo los presupuestos fácticos que aparecen probados en el proceso y la normatividad que resulta aplicable al caso, si a la actora le asiste o no derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme a lo previsto en el artículo 01 de la ley 33 de 1985 y/o, en los artículos 9 y 10 de la ley 797 del 2003 que modificó el artículo 33 de la ley 100 de 1993, a pesar de tener reconocida la pensión de jubilación en el régimen de excepción de los docentes y, si es o no, procedente que pueda optar por una u otra prestación, en aplicación del principio de favorabilidad ?

Extracto

“(...) se tiene que, la pensión de jubilación reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG..., expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila... es indiscutiblemente, incompatible con la pensión de vejez cuyo reconocimiento pretende en este proceso; sin embargo, conforme a los artículos 31 del decreto 3135 de 1968 y 88 del decreto 1848 de 1969, ante la imposibilidad de percibir las dos prestaciones, el pensionado puede optar por la más beneficiosa a sus intereses económicos (...).

Por lo anterior, le asiste razón a la demandante al considerar que, al estar cobijada por el régimen de transición, podía optar por la Pensión de Vejez en los términos de la ley 33 de 1985 y, en ese orden de ideas, la UGPP, debió tomar en consideración su manifestación voluntaria de renunciar a la prestación reconocida anteriormente por el FOMAG, analizando de fondo la solicitud de reconocimiento en aplicación del principio de favorabilidad.

Ahora, es claro que la incompatibilidad alegada por la UGPP se configuraría en el evento en que la pretensión de la actora fuera que se le reconociera la pensión de vejez y continuar devengando la pensión de jubilación que ya tiene reconocida por el FOMAG, situación que no es la que se discute en este caso.

En este orden, le asiste el derecho a la parte actora de optar por la mesada pensional que más favorezca a sus intereses, pues ella cumplió con la carga de afiliación, tiempo de servicio y pago de aportes, en las entidades a las cuales laboró y cumplió con los requisitos para obtener las mesadas pensionales, y si bien no las puede percibir al mismo tiempo, pues este vedado en la legislación nacional obtener doble erogación del erario, lo cierto es que en aplicación del principio de favorabilidad si puede acceder a la que le represente mejores ingresos y por ende mejor calidad de vida.

Sin embargo, el Despacho no accederá a la pretensión de reconocer las mesadas pensionales a cargo de la UGPP a partir del (...) retiro definitivo del servicio de la actora, cancelando las diferencias que resulten, entre la pensión que actualmente percibe a través del FOMAG y la nueva prestación (...) Lo anterior, porque, se configuraría desde el año 2019 un doble pago por la misma prestación, a cargo de dos entidades públicas y en favor de la misma persona, por un lado el pago de la pensión del FOMAG y por el otro, la pensión, de igual naturaleza, de la UGPP, y así se pida que esta última sea en complemento, o mejor, así se solicite que se descuente la pensión del FOMAG (...) en consideración de este Juzgado, se estaría trasgrediendo el artículo 128 constitucional y el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969. Lo anterior se explica, en que, el pago simultaneo de las dos pensiones (desde el 2019, en virtud de la solicitud de pago retroactivo), está dentro de la prohibición legal de percibir de forma concurrente las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, que son incompatibles entre sí”.

Ver providencia:

[SAMA|DECISIÓN](#) (Decisión sin firmeza, en razón a que actualmente se encuentra corriendo términos de ejecutoria)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Juzgado:	Sexto Administrativo de Neiva
Instancia:	Primera
Radicación:	41001333300620240021500
Demandante:	ECOPROCESADORA ICE & FISH S.A.S.
Demandado:	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
Fecha:	6 de febrero de 2025

DERECHO A LA EXENCIÓN DE LA SOBRETASA O CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO

Problema Jurídico

¿(...) se determina que la discusión gira en la aplicación de la ley 1430 de 2010 respecto a la contribución sector eléctrico usuarios industriales, donde la parte actora dice ser destinataria de los mismos, y que cumplió con las cargas y trámites necesarios para ser exonerada desde el 15 de febrero de 2023 (...) el conflicto a resolver es si la excepción opera de pleno derecho o si se requiere o no la solicitud por parte del beneficiario, y en caso positivo si se cumplió o no con ese requisito para la generación de la acción de cobro (...)?

Extracto

“Entonces, sumado al hecho de la inexistencia de la pérdida del derecho por no haberse presentado la solicitud de continuidad de la exención cada 6 meses como lo indica su reglamentación, también debe procederse con la devolución de la contribución del usuario, cuando demuestre dicho derecho, que de paso sea, lo único exigible para determinar la continuidad en la aplicación de la exención, es la presentación del RUT actualizado ante la empresa prestadora del servicio.

Por consiguiente, frente a la solicitud que se discute haber presentado en fecha 11 de octubre de 2023, referente a la solicitud de actualización de la exención a la contribución, en la medida que no existe certeza sobre el tipo de solicitud que se realizó y se cuestiona su trazabilidad sin que exista elemento de juicio técnico o tecnológico que determine lo acontecido, por tanto, conforme lo analizado en esta instancia procesal resulta inane la acreditación o no de la presentación, pues el

derecho es otorgado por disposición legal y subsidiariamente resulta procedente la devolución cuando se demuestre que se tiene el derecho, con el simple aporte del RUT actualizado ante ELECTROHUILA S.A. E.S.P. ”

(...)

“Bajo tales consideraciones, en la medida que persiste el derecho a la exención y resulta desproporcionado el efecto de la pérdida del beneficio por no aportarse el RUT actualizado para su continuidad, por tanto, el cobro por valor de \$32’375.194 efectuado por ELECTROHUILA S.A. E.S.P. mediante el documento RADICADO 05-PQR-008615-S-2024 de la contribución correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, no resulta procedente dicho cobro.

En el mismo sentido, como la parte demandante realizó un acuerdo de pago¹⁹ con la demandada, por tanto, cualquier pago que se hubiese efectuado por dicho concepto de la contribución especial para ese periodo, constituye un pago indebido que puede solicitarse en devolución a ELECTROHUILA S.A. E.S.P. como empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89.6 de la Ley 142 de 1994 y 6 del Decreto 847 de 2001, incorporado en el artículo 2.2.3.2.6.1.5. del Decreto 1073 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”.

Bajo tales parámetros, como resultan prósperas las pretensiones del presente proceso y en la medida que no es procedente el cobro efectuado por ELECTROHUILA S.A. E.S.P. a ECOPROCESADORA ICE Y FISH mediante radicado No. 05-PQR-008615-S-2024 del 16 de abril del 2024, esto subsume el análisis de los demás cargos emprendidos por la parte actora contra dicha decisión correspondientes a la no concesión de recursos contra la decisión, la no procedencia de la suspensión del servicio y falta de competencia de funcionario que expide el acto, en la medida que para evaluar los mismos se hace necesario que el acto administrativo surta sus efectos de lo contrario no tiene ninguna utilidad u objeto su evaluación, ya que materialmente el acto administrativo que permite evaluar esos aspectos se declaró nulo y con ello jurídicamente dejó de existir aun desde su emisión, dados los efectos ex tunc de la decisión.”

Ver providencia:

[SAMA|DECISIÓN](#) (Decisión ejecutoriada en primera instancia, en razón a que la decisión no fue recurrida).

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Juzgado:	Sexto Administrativo de Neiva
Instancia:	Primera
Radicación:	41001333300620230032900
Demandante:	VICTOR SEGUNDO PARRA OVIEDO
Demandado:	DIAN
Fecha:	7 de marzo de 2025

CONTROVERSIA CON LA INFORMACIÓN DE TERCEROS (EXÓGENA) EN LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN DE RENTA E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR INEXACTITUD.

Problema Jurídico

¿... establecer si debe hacerse o no el control de legalidad de los actos administrativos contenidos en la Liquidación Oficial de Revisión No. 2022013050000113, del 1 de septiembre de 2022, Impuesto de Renta y Complementarios año 2017, mediante la cual se modifica la liquidación privada e impuso sanción por inexactitud de VICTOR SEGUNDO PARRA OVIEDO; y la Resolución No. 2023013060000664 del 28 de agosto de 2023, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior liquidación, específicamente en cuanto a las condiciones de valoración probatoria, para la determinación del tributo de renta para la vigencia fiscal 2017 del demandante, y con ese control de legalidad, el restablecimiento del derecho dependerá de si efectivamente está obligado o no a asumir la obligación dineraria o económica fijada, y en caso de que haya sido pagada, si es procedente o no el respectivo reintegro?

Extracto

“Bajo dichos derroteros, la persona obligada a acreditar los costos, gastos y deducciones es el contribuyente, y, conforme los lineamientos legales y jurisprudenciales, los hechos consignados en las respuestas a las requerimientos o registros contables, pueden solicitarse su comprobación o tacharse de falsos, con el fin de controvertir su certeza; siendo este el medio idóneo y pertinente para controvertir la información “endógena” hallada por la DIAN como fruto de su auto de requerimiento de información de terceros y recaudada directamente por la Entidad.

En consonancia con lo anterior, los testimonios de los señores LUIS HERNANDO QUITIAQUEZ PASTAZ y ALVARO VILLAMIZAR OCHOA practicados en la audiencia de pruebas de fecha 20 de noviembre de 2024, este último como contador para la época de los hechos de la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE GANADO BOBINO A.H. S.A.S, que aunque aportó un recibo de pago de una sanción³² e indica haberse presentado un error en la información reportada al demandante, no tiene la condición jurídica de representación de dicha persona jurídica, y se afirma tal calidad ya que fue esa entidad la que primigeniamente entregó la información ahora en discusión, por lo cual, si lo que se busca rebatir es la afirmación de ella, no basta la afirmación de un tercero, deben existir otros elementos de juicio que construyan el convencimiento del error del otro. ”

(...)

“Situación por la cual gozan de plena validez las pruebas obrantes en el expediente administrativo, las cuales se encuentran debidamente certificadas y expedidas por contadores públicos, sin que se hubiesen tachado de falsas, como medio idóneo para controvertir su certeza, y ello conlleva a negar las pretensiones de la demanda.

Podría pensarse que ante documentos posteriores emitidos por los terceros que certificaron la existencia de esos negocios jurídicos para ahora afirmar su inexistencia son suficientes para acreditar la debida justificación ante la DIAN, pero se pasa por alto algo, el simple hecho de retractarse no anula o extingue la manifestación anterior, por el contrario, se exige la existencia de un debido apoyo o fundamento, se debe contrastar los medios o información inicial con la posterior, se recuerda que en el caso en estudio se certificó el negocio y se aportaron documentos soportes en forma inicial, pero al parecer ser reconvenidos por el demandante deciden manifestar un error, pero no aportaron elementos de juicio del por qué, como ahora, intentando en sede judicial los testigos que son unos terceros, afirmando bien sea errores de digitación o caso de homónimos.

Pues el error sobre el que supuestamente informaron a la DIAN se evidenció y corrigió, debió acreditarse ese hecho en el expediente administrativo, no basta la aceptación y pago de una multa, porque no se sabe cuál error se corrigió, un recibo de pago es eso, la demostración de una erogación mas no la explicación de los hechos. Entonces, si se corrigió la información interna de esas empresas y se quería generar los efectos ante la autoridad tributaria, debían aportar los elementos de juicio y credibilidad del error, entiéndase si fue error de digitación, cuál fue el error, y cómo se corrigió, y si es de homonimia, quién entonces fue el verdadero gestor de la operación jurídica, cómo se

dio el pago de los recursos y por ello se excluye al ahora demandante, por lo cual no prosperan las pretensiones de la demanda.”

Ver providencia:

[SAMAI/DECISIÓN](#) (Decisión sin firmeza, en razón a que actualmente se encuentra corriendo términos de ejecutoria)

REPARACION DIRECTA



Juzgado:	Séptimo Administrativo de Neiva
Instancia:	Primera
Radicación:	41001333300720200031100
Demandante:	ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
Demandado:	Nación Rama Judicial
Fecha:	27 de febrero de 2025

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE TITULO VALOR EN PROCESO EJECUTIVO (DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)

Problema Jurídico

¿ Determinar si la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la entidad demandante con ocasión al error jurisdiccional y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que se incurrió por parte del Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, dentro del proceso ejecutivo singular bajo radicado 41001400300320050041200, el cual permitió que se extraviara los títulos judiciales materia de ejecución, permitiendo que se diera por terminado el proceso por parte del Superior, sin realizar en debida forma la reconstrucción del mismo?

Extracto

“En este evento, la ESE HOSPITAL UNIERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA reclama la responsabilidad del Estado por el error jurisdiccional en el que incurrió el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, que dictó mandamiento de pago sin tener competencia, así como el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, el cual, por descuido perdió los títulos valores materia de ejecución, como tampoco fue diligente al reconstruir el expediente.”

“Así las cosas, frente a las pruebas antes relacionadas se advierte que efectivamente las actuaciones surtidas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva atribuyen un daño antijurídico, en primera medida, por la pérdida de los títulos valores que se

encontraban bajo su custodia, y en segundo lugar, no realizar la reconstrucción del expediente en debida forma, ya que los títulos valores aportados en segunda

oportunidad durante el proceso de reconstrucción no coincidían con los aportados inicialmente con la demanda, los cuales fueron remitidos a ese Despacho mediante Oficio No. 0954 del 15 de julio de 2005, por parte del Juzgado 3 Laboral del Circuito de Neiva.

En consecuencia, se materializó una falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que las constantes omisiones en las cuales incurrió la titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva devinieron en que la parte ejecutante no pudiese continuar con la solicitud de pago incoada, razón suficiente para que el Superior declarara la terminación del proceso debido a dichas omisiones”

En tales condiciones, para el Despacho se encuentra configurado un daño antijurídico imputable a la entidad demandada que compromete la responsabilidad patrimonial de ésta, y por tal razón debe indemnizar los perjuicios materiales derivados del no pago de los valores adeudados por concepto de servicios médicos prestados a sus afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Adicionalmente, es importante resaltar que la pérdida de los títulos valores y la deficiente reconstrucción del expediente no sólo generaron un perjuicio económico directo a la parte demandante, sino que también afectaron su derecho fundamental al acceso a la justicia. La falta de diligencia y cuidado por parte de los funcionarios judiciales involucrados evidencia una clara vulneración de los principios de eficiencia y eficacia que deben regir la administración de justicia”.

Ver providencia:

[SAMAI|DECISIÓN](#) (Decisión sin firmeza, en razón a que actualmente se encuentra corriendo términos de ejecutoria)

REPARACION DIRECTA



Juzgado:	Decimo Administrativo de Neiva
Instancia:	Primera
Radicación:	41001333300520220049600
Demandante:	William Andrés Bermeo Silva y Otros
Demandado:	Enel S.A. E.S.P. antes Emgesa S.A. E.S.P.
Fecha:	18 de octubre de 2024

NO APLICA CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIA, CUANDO LA DEMANDADA SEA UNA SOCIEDAD CUYOS APORTES ESTATALES NO SUPEREN EL 50%.

Problema Jurídico

“Se resuelve sobre la jurisdicción y competencia para conocer del presente proceso.”

Extracto

“23.- Por lo que, la demandada Emgesa S.A. E.S.P. hoy Enel S.A. E.S.P., ahora no es, ni puede considerarse o asimilarse a una entidad pública conforme el artículo 104 del CPACA, y por ende le es aplicable la regla de asignación de competencia instituida por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 946 de 2021 y reiterada en el Auto 1409 de 2024, pues se memora que con la contestación de la demanda dentro del presente medio de control de reparación directa, se aportó un Certificado de Existencia y Representación Legal de la demandada expedido el 2 de mayo de 2023, con el cual se acredita que ella cambió su nombre o razón social pasando de llamarse “EMGESA S.A. ESP” a denominarse “ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.”, lo certifica la Cámara de Comercio en los siguientes términos “Por Escritura Pública No. 562 del 1 de marzo de 2022 de Notaría 11 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de marzo de 2022, con el No. 02798609 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de EMGESA S.A. ESP. a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.”.

“24.- Así mismo, en dicho documento «Certificado de Existencia y Representación Legal», en la página 2 y 3 aparece la Cámara de Comercio certificando de que “Por Escritura Pública No. 562 del 01 de marzo de 2022 de la Notaría 11 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de marzo de 2022, con el No. 02798609 del

Libro IX, mediante fusión la sociedad: EMGESA S.A. E.S.P. (Ahora ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P) (absorbente), absorbe a las sociedades: CODENSA S.A E.S.P., ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P., y la sociedad extranjera ESSA2 SpA (absorbidas)., las cuales se disuelven sin liquidarse.”

25.- Estableciéndose con claridad que la principal ACCIONISTA de la demandada es una empresa privada denominada ENEL AMERICAS S.A., con el 57,345%; y la segunda accionista es GRUPO ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., con el 42,515%; haciendo así aplicable la regla de competencia de la H. Corte Constitucional, en el Auto 946 de 2021 y reiterada en el Auto 1409 de 2024 (...).”

“29.- Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente caso en materia de asuntos declarativos donde se reclama la responsabilidad civil extracontractual en contra de la empresa Emgesa S.A. E.S.P (hoy Enel Colombia S.A.), los mismos serán competencia de la jurisdicción ordinaria especialidad civil, la cual guarda competencia general en consonancia con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 de conformidad con artículo 12 de la Ley 270 de 1996, 15 del Código General del Proceso y el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, aspecto que es extraño a la cláusula de competencia funcional de los jueces administrativos”.

Ver providencia:

[SAMAI|DECISIÓN](#) (Decisión ejecutoriada en primera instancia).

NOTA

Los Juzgados son los encargados de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado en el [aplicativo SAMAI](#).

CONTÁCTENOS

Sede Juzgados Administrativos

Carrera 4 No. 12-37 Neiva, Huila

Email: coorjadmva@cendoj.ramajudicial.gov.co

<https://www.facebook.com/share/1BJa5ALj2U/?mibextid=wwXIfr>

BOLETÍN

JUECES ADMINISTRATIVOS DE NEIVA

